



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

S.J.: 576/2023

Ref. Contratación: 093/2024 (Antecedentes: 138/2021 [A/ser-034262/2021]).

Se ha recibido en este Servicio Jurídico expediente de modificación del contrato de **“SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA EN ADICCIONES A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A ADOLESCENTES Y A SUS FAMILIAS”**, adjudicado a **“INSTITUTO DE BIENESTAR PSICOLÓGICO Y SOCIAL, S.L.”**.

A la vista de la documentación obrante en el expediente administrativo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.b) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, se emite el siguiente

INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero-. Mediante la Orden 1087/2022, de 17 de mayo, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, se adjudicó al contratista anteriormente identificado el contrato de servicios señalado *ut supra* (en adelante, el contrato).

Segundo-. El contrato administrativo correspondiente fue formalizado en fecha 16 de junio de 2022, quedando previsto su duración inicial para el periodo que mediara entre el 1 de enero de 2022 y 31 de diciembre de 2024.

Tercero-. Por el centro gestor se propone la **modificación** del contrato **consistente** en **incrementar** el número de profesionales contratados en **3 psicólogos a tiempo completo y un educador social a media jornada**.

Cuarto-. Consta en el expediente haberse otorgado audiencia al contratista.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

Primera-. El párrafo segundo de la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), remite a la normativa vigente en el momento de adjudicación del contrato con vistas a la determinación del régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción.

Atendida la fecha de adjudicación del contrato del que trae causa la modificación objeto de informe, la normativa sustantiva aplicable viene constituida por la propia **LCSP**. Asimismo, y en cuanto no se oponga a lo establecido en dicho texto legal, por el **Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre**, y por el **Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril**.



En concreto, y conforme a nuestra tradición legislativa, la LCSP contempla en su **artículo 190** entre las prerrogativas de la Administración en la contratación administrativa, la posibilidad de modificar los contratos por razones de interés público.

Más en detalle, desarrolla el **artículo 203** los aspectos esenciales de la potestad de modificación, viniendo a diferenciar entre las causas de modificación contempladas, con indicación de los concretos supuestos en que sea posible, en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), y las recogidas, en términos muy restrictivos, en la propia ley. Así, señala su **apartado 2** que la modificación del contrato será posible, en cuanto afecta al presente:

*“a) Cuando así **se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares**, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204”.*

Dicho **art. 204** se dispone¹:

“1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguientes:

*a) **La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca.***

*b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, **la cláusula de modificación deberá precisar con el detalle suficiente:** su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.*

La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos”.

En el caso sometido a informe, el PCAP recogió en la cláusula 1.22 la posible modificación del contrato:

*“MODIFICACIÓN: **Incremento** de horas y **de profesionales** para la atención psicológica.*

*CONDICIONES EN QUE PODRÁN EFECTUARSE: **en el supuesto de que el número de menores que se encuentren en lista de espera supere el 20% del total de casos abiertos, se podrá aumentar media jornada de la atención psicológica**, lo que supondrá realizar mayor número de sesiones con los menores y atender un mayor número de familias*

La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por

¹ El apartado 2 trata de “modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial”, lo que evidentemente no afecta a la que nos ocupa.



parte de los primeros de las condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos.

Las modificaciones indicadas anteriormente se realizarán atendiendo a las necesidades concretas que resulten del seguimiento y control realizado por la Comisión de Seguimiento y Supervisión del contrato, de la información funcional, económica, técnica o cualquier otra relacionada con la actividad del servicio contratado que sea solicitada por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad a la Entidad adjudicataria y del funcionamiento integral del recurso.

PROCEDIMIENTO. Cuando la modificación consista en la necesidad de nuevo personal, ésta se realizará atendiendo a los costes salariales del puesto de acuerdo con la categoría profesional del puesto que figure en el Convenio Colectivo estatal de Acción e Intervención Social 2015-2017.

El procedimiento para la modificación de los elementos citados requiere de trámite de audiencia del interesado, informe previo de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y fiscalización por la Intervención, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 204, 205 y 207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público².

Aprobada la modificación, la Consejería requerirá al adjudicatario para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación, aplique efectivamente las modificaciones.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas.

PORCENTAJE DEL PRECIO DEL CONTRATO AL QUE COMO MÁXIMO PUEDEN AFECTAR. *El porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones será del 20% del precio primitivo del contrato, con exclusión del IVA².*

En resumen, la modificación debe cumplir con dos requisitos fundamentales según los pliegos del contrato:

- a) Que el número de menores que se encuentran en lista de espera supere el 20% del total de casos abiertos, supuesto en el que se podrá aumentar media jornada de la atención psicológica.
- b) Que el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las modificaciones será del 20% del precio primitivo del contrato, con exclusión del IVA.

Según la memoria, punto 2:

“De acuerdo con lo dispuesto en el art. 203 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el Apartado 22 de la Cláusula I del PCAP, el contrato puede ser objeto de modificación en el supuesto de que el número de menores que se encuentren en lista de espera supere el 20 por 100 del total de los casos abiertos (...), pudiéndose en caso de que se diera dicha condición incrementar en un 50 por 100 el servicio de atención psicológica, siempre que se respete el porcentaje máximo al que puede afectar la modificación que, de acuerdo con el citado precepto, alcanza al 20 por 100 del precio primitivo del contrato.

² En el presente contrato, es aplicable el **art. 204** (Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares) y **207** (especialidades procedimentales, especialmente el punto 2: “audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas”), pero no lo es 205 (“Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales”), al tratarse de una modificación prevista en los pliegos”).



Entendiendo que el precio primitivo del contrato se sitúa en 902.448,41€ (IVA excluido), el importe máximo al que puede afectar la modificación alcanza los 180.489,76€”.

Asimismo, desde la perspectiva procedimental remite a lo señalado en el **artículo 203 de la LCSP**.

Las circunstancias que hacen necesaria la modificación aparecen referidas en la memoria de la modificación, suscrita por la titular de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad en fecha 27 de noviembre de 2023, así como en la propia propuesta de orden de modificación. En ella se alude, como causa de la modificación (punto 3):

“Desde la Subdirección de Infancia y Adolescencia, unidad que asume la dirección del contrato y que realiza el seguimiento de su ejecución, se ha observado un notable incremento de la demanda de todas las actuaciones del Servicio que, en lo relativo a la atención directa, supera el límite del 20 por 100 definido en el PCAP como condición para el impulso de la modificación del contrato, ya que mientras que los Pliegos de Prescripciones Técnicas, determinan que el Servicio debe tener capacidad para atender a 300 usuarios al trimestre en intervención directa, los datos de gestión a septiembre de 2023 indican una demanda entre enero y septiembre de 1.482 solicitantes, lo que supone una demanda trimestral de 494 potenciales usuarios del Servicio (un 64 por 100 más de lo previsto y dotado para el Servicio”.

De la misma manera, aparecen descritos los criterios tenidos en cuenta a la hora de recalculer el precio del contrato, cuya variación no supera el límite establecido legal y contractualmente (punto 3 de la memoria), señalando **que el importe total de la modificación será de 116.859,69€**, cantidad inferior a la máxima señalada *ut supra*.

Segunda.- Desde el punto de vista procedimental, aspecto en que la disposición transitoria primera de la LCSP no deja duda sobre su aplicación al supuesto analizado, se ha seguido la tramitación prevista con carácter general para el ejercicio de las prerrogativas en materia de contratación en su **artículo 191³** así como las especialidades contempladas en su **artículo 207**, habiéndose cumplimentado en particular el trámite de audiencia a la contratista adjudicataria, que ha manifestado expresamente su conformidad con la modificación propuesta, mediante escrito de 24 de noviembre de 2023, que figura en el expediente.

En cambio, no es necesario el informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid al no cumplirse los presupuestos necesarios para ello de conformidad con el **apartado 3.b) del precitado artículo 191⁴**.

En cualquier caso, deberá atenderse a lo preceptuado en el **artículo 203.3⁵**, en relación con los **artículos 207 y 63**, en lo concerniente a la formalización y publicidad de la modificación.

En el borrador de la cláusula de modificación del contrato, en su cláusula tercera, se ha tenido en cuenta la necesidad de ampliar la garantía definitiva constituida de conformidad con la

³ “1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista”.

⁴ “será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación: Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, **sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros**”.

⁵ “Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63”.



cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el artículo 109.3 de la mencionada Ley de Contratos del Sector Público. Así dice:

“CUARTA.- El contratista ha constituido garantía definitiva en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, por importe de 5.851,52 euro, mediante resguardo de garantía ,en, de fecha , que, sumado a las garantías definitivas constituidas en la Tesorería de la Comunidad de Madrid,resguardos de garantía mediante retención del precio números 202255005855Y, por importe de 27.574,82 euros, y 202255005856H, por importe de 17.547,62 euros, ambos de fecha 2 de octubre de 2022 asciende a un total de 50.973,96 euros.”

Es necesario señalar que en la documentación del expediente lo que consta es una serie de recibos de pago del seguro pero no el aumento de la garantía originalmente constituida, debiendo incorporarse y teniendo esta consideración el carácter de esencial.

Por lo expuesto procede formular la siguiente

CONCLUSIÓN

Examinado el expediente de modificación del contrato de **“SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA EN ADICCIONES A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS”**, se emite informe favorable a la modificación propuesta por el órgano de contratación, debiendo tenerse en cuenta la consideración que, con carácter esencial, se ha realizado.

En Madrid, a fecha de firma

EL LETRADO DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES.

Documento firmado digitalmente por: DE SANTIAGO FONT MERCEDES GUADALUPE
Fecha: 2023.12.29 14:22
Verificación y validez por: [REDACTED]
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

Fdo.: Mercedes de Santiago Font.

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. CONSEJERÍA DE
FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL.